



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: RESIDUAL
Radicado: 05001-22-05-000-2021-00261-00 (R2-21-001)
Accionante: AGREMIACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES
CON DIFERENTES PROFESIONES, ARTES Y OFICIOS DIGORE –
ANTRAINDIGO
Accionada: COOMEVA EPS S.A.
Procedencia: SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA FUNCIÓN
JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD
Providencia: SENTENCIA n.º 59
Asunto: PAGO INCAPACIDADES TRABAJADOR INDEPENDIENTE AGREMIADO

En Medellín, a los ocho (8) días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso jurisdiccional conocido bajo el radicado único nacional 05001-22-05-000-2021-00261-00 (R2-21-001), instaurado por la AGREMIACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES CON DIFERENTES PROFESIONES, ARTES Y OFICIOS DIGORE – ANTRAINDIGO en contra de COOMEVA EPS S.A., con el fin de resolver la impugnación presentada por la accionante, respecto de la decisión que selló la primera instancia, proferida el 23 de octubre de 2020 por la SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, “[p]or medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones”, se adopta la decisión correspondiente mediante la presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

1. ANTECEDENTES

La AGREMIACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES CON DIFERENTES PROFESIONES, ARTES Y OFICIOS DIGORE – ANTRAINDIGO, en lo sucesivo, ANTRAINDIGO, actuando a través de su representante legal, promovió acción ante la Superintendencia Nacional de Salud y en contra de COOMEVA EPS S.A., con miras a obtener el reconocimiento y pago de los auxilios por incapacidad adeudados por ésta, con los intereses de mora que correspondan, respecto de los agremiados y en los términos que a continuación se relacionan:

No.	NOMBRE DEL AGREMIADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DÍAS DE INCAPACIDAD
1	ÁLVARO ZAPATA ZAPATA	20/07/2015	5/08/2015	17
2	ÁLVARO ZAPATA ZAPATA	6/08/2015	22/08/2015	17
3	ÁLVARO ZAPATA ZAPATA	23/08/2015	22/09/2015	30
4	ÁLVARO ZAPATA ZAPATA	42270	42283	14
5	MARÍA CARMENZA CASTAÑEDA VERGARA	18/03/2016	19/03/2016	3
6	MARÍA CARMENZA CASTAÑEDA VERGARA	21/03/2015	23/03/2015	3
7	MARÍA CARMENZA CASTAÑEDA VERGARA	6/04/2016	8/04/2016	3
8	MARÍA CARMENZA CASTAÑEDA VERGARA	42645	42674	30
9	MARÍA CARMENZA CASTAÑEDA VERGARA	1/11/2016	10/11/2016	10
10	MARÍA CARMENZA CASTAÑEDA VERGARA	24/11/2016	26/11/2016	3
11	MARÍA CARMENZA CASTAÑEDA VERGARA	29/11/2016	3/12/2016	5
12	MARÍA CARMENZA CASTAÑEDA VERGARA	42724	42725	2
13	MARÍA CARMENZA CASTAÑEDA VERGARA	23/12/2016	24/12/2016	2
14	MARÍA CARMENZA CASTAÑEDA VERGARA	17/01/2017	18/01/2017	2
15	MARÍA CARMENZA CASTAÑEDA VERGARA	20/01/2017	21/01/2017	2
16	MARÍA CARMENZA CASTAÑEDA VERGARA	42984	42985	2
17	MARÍA CARMENZA CASTAÑEDA VERGARA	14/09/2017	16/09/2017	3
18	MARÍA CARMENZA CASTAÑEDA VERGARA	4/10/2017	4/10/2017	1
19	MARÍA LUZ MILA DÍAZ MOSQUERA	13/11/2015	27/11/2015	15
20	RAMÓN EUCARIS PORRAS	42062	42091	30
21	JOHN FREDY MEDINA MESA	3/11/2015	22/11/2015	20
22	HÉCTOR HERNAN CARDONA ARTEAGA	11/07/2015	25/07/2015	15
23	ADALBERTO MERCADO	10/08/2015	24/08/2015	15
24	ADALBERTO MERCADO	42241	42250	10
25	ADALBERTO MERCADO	5/09/2015	14/09/2015	10
26	ADALBERTO MERCADO	15/09/2015	23/09/2015	9
27	SAUL ALBEIRO MONTOYA MONSALVE	28/07/2015	26/08/2015	30

28	SAUL ALBEIRO MONTOYA MONSALVE	42243	42271	29
29	VÍCTOR JULIO MOLINA PATIÑO	1/12/2016	30/12/2016	30
30	VÍCTOR JULIO MOLINA PATIÑO	2/01/2017	31/01/2017	30
31	VÍCTOR JULIO MOLINA PATIÑO	4/04/2017	6/04/2017	3
32	ÁLVARO DE JESÚS CORREA GIL	42648	42677	30
33	OMAR DE JESÚS DÍAZ CARDONA	28/11/2016	4/12/2016	7
34	LUZ DARY CARDONA GARCÍA	25/10/2016	23/11/2016	30
35	LUZ DARY CARDONA GARCÍA	24/11/2016	8/12/2016	15
36	MARIELA ACEVEDO GRANDA	42630	42643	15
37	BERTHA OLIVA OSPINA	14/06/2017	16/06/2016	3
38	BERTHA OLIVA OSPINA	25/09/2016	4/10/2016	10
39	BERTHA OLIVA OSPINA	29/08/2016	12/09/2016	15
40	GLORIA MARÍA GUTIÉRREZ	42737	42766	30
41	GLORIA MARÍA GUTIÉRREZ	30/10/2016	5/11/2016	7
42	CAMILO ALIRIO RIVERA	5/12/2016	10/12/2016	6
43	GLORIA CECILIA PIZA CARDONA	20/11/017	19/12/2017	30
44	JOSÉ HERMIDES OCHOA MORENO	43032	43051	18
45	OSCAR NORBEY PATIÑO RESTREPO	14/11/2017	18/11/2017	3

Gráfico núm. 1

En respaldo de sus aspiraciones señala que ANTRAINDIGO es una “...entidad de afiliación colectiva, sin animo(sic) de lucro, autorizada por el Ministerio de la Protección Social, para la afiliación, reporte de novedades y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes, o autonomos(sic) y del servicio domestico(sic) por días regimen(sic) contributivo, mediante las resoluciones No. 3605 de 20016(sic) y complementada por la 2675 de 2014, del Ministerio de Salud y Protección Social”; que bajo tal condición efectuó el pago de aportes a los agremiados o asociados y sin que aquellos perdieran la calidad de trabajadores independientes.

Cuenta que “[l]as incapacidades adeudadas a nuestros asociados, están siendo acumuladas desde el año 2015 hasta el año 2017, a la espera de una solución por parte de la EPS COOMEVA, quienes desde el año 2015 nos prometieron que después de “depurar cartera”, la cual es presunta, ya que como independientes pagamos mes anticipado, nos pagarían...”; sin embargo sostiene que a la fecha hay un saldo insoluto por este concepto y que por tal razón han presentado distintos derechos de petición, los que, valga decir, fueron contestados de forma adversa a sus aspiraciones, bajo el supuesto de la existencia de una mora. Por todo lo anterior, considera le asiste derecho a sus pedimentos, máxime cuando se encuentran al día en el pago de los aportes respectivos.

1.1. Trámite de primera instancia

La acción se admitió el 08 de junio de 2018 (págs.2 y 3, doc.02, carp.01), y se notificó a la demandada EPS COOMEVA S.A. el 13 de julio de esa anualidad (págs.6 y 9, doc.02, carp.01), la que se opuso a la prosperidad de las pretensiones, negando la veracidad de los hechos que fueran narrados por la promotora de la litis. En su defensa, propuso con el carácter de perentorias, las excepciones que individuó como mora en el pago de los aportes al SGSSS – causal de negación de las prestaciones económicas pretendidas, buena fe y la genérica (doc.03, carp.01).

1.2. Decisión de Primera Instancia

La controversia planteada se dirimió el 23 de octubre de 2020 (págs.16 a 22, doc.02, carp.01), mediante sentencia proferida por la SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, en la que resolvió “...*NO ACCEDER a las pretensiones de la demanda presentada el(sic) señor ANTONIO JOSÉ GARCÍA BETANCOURT representante legal de la AGREMIACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DIGORE ANTRAINDIGO, en calidad de DEMANDANTE...*”

Para sustentar su decisión, el cognoscente de primer grado advirtió que la promotora ANTRAINDIGO carecía de legitimación en la causa por activa en lo atinente a la reclamación de los auxilios de incapacidad de sus trabajadores asociados, pues esta organización “...*por no ostentar la calidad de empleador no es la titular directo(sic) del derecho de reclamación ante la EPS; este derecho reside en los asociados a la AGREMIACIÓN, quienes no pierden la condición de cotizantes independientes al S.G.S.S.S.S.(sic), así sea que sus aportes lo hagan a través de un 3° autorizado por la Ley(sic).*”

1.3. De la Impugnación

El representante legal de la actora ANTRAINDIGO, presentó impugnación contra la decisión adoptada en primera instancia en aras que se revoque integralmente la misma, aduciendo que “...*[i]gnora la Superintendente Delegada para la Función Jurisdiccional, la Señora(sic) IVHON ADRIANA FLÓREZ PEDRAZA, la prueba anexada en su conjunto asumiendo hechos que no corresponden a la realidad, como por ejemplo que solo actuó en calidad de representante legal de la AGREMIACIÓN DIGORE, cuando actuó como apoderado de cada uno de los asociados que reclama su prestación económica; también ignora el hecho de que la AGREMIACIÓN*

DIGORE NUNCA ha estado en mora de los aportes de cada uno de estos asociados, y prueba de ello se adjuntó a la demanda, contradiciéndose en sus escrito(sic) COOMEVA EPS, afirmando que no pagó por mora del aportante, pero hace un pago parcial de algunas de las incapacidades relacionadas del año 2016”; agregando que la “...la AGREMIACIÓN DIGORE solo presenta este inconveniente con el pago de las prestaciones económicas de los asociados con la EPS COOMEVA con quien siempre se ha tenido que ventilar ante los jueces de la república, su mala costumbre de negar y postergar el pago de las prestaciones económicas de sus afiliados, estén agremiados o no, pues muchas de ellas se lograron obtener por medio de tutelas pero muchas otras como estas que se reclaman mediante esta demanda, no pudieron ser cobradas de ninguna manera; toda vez que nos convencieron de que nos iban a cancelar todas las incapacidades” (págs.30 a 87, doc.02, carp.01)

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la asociación ANTRAINDIGO advirtiéndose que, de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio de la sentencia recurrida se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada.

2.1. Problema jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a determinar si la agremiación ANTRAINDIGO, acreditó legitimación en la causa por activa para la reclamación de lo auxilios por incapacidad de los trabajadores relacionados con antelación, y de ser así, dilucidar si la sociedad COOMEVA EPS S.A. está llamada a reconocer y pagar los auxilios de incapacidad de origen común junto con los intereses moratorios reclamados. A efectos de lo anterior y en atención a las circunstancias relevantes que rodean la controversia, la Sala se ocupará en su orden, a determinar: **i.** Los presupuestos materiales de toda sentencia estimatoria; **ii.** La afiliación colectiva de los trabajadores independientes al SGSSS; y **iii.** Las obligaciones y deberes de las agremiaciones y asociaciones como entidades autorizadas para la afiliación colectiva de trabajadores independientes en materia de prestaciones económicas ante una contingencia de origen común.

2.2. Sentido del Fallo

La Sala revocará la decisión de primer grado, considerando que, conforme las traslúcidas disposiciones contenidas en los artículos 2.1.4.6, 3.2.6.2, 3.2.6.6., 3.2.6.10 y 3.2.6.14 del Decreto 780 de 2016, la vinculación del trabajador independiente a una cualquiera de las agremiaciones y asociaciones que cumplan la función de afiliación colectiva al SGSS, no supone ni constituye que con sus afiliados se establezca una relación de trabajo, por ende, el afiliado conserva ante las entidades de seguridad social la condición de trabajador por cuenta propia, y en virtud de lo anterior, es éste quién se encuentra legitimado para reclamar el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas del caso ante las entidades aseguradoras por la ocurrencia de una contingencia, bien de manera directa o a través de apoderado judicial.

En orden a lo anterior, las entidades dedicadas a la afiliación colectiva solo se encuentran a autorizadas para “[c]olaborar con el afiliado para obtener el pago de las prestaciones económicas respectivas a que tenga derecho¹”; y siendo que la accionada presentó la acción ante el ente administrativo competente en ejercicio del poder que le fuera conferido por los titulares del derecho a las prestaciones económicas, adquiere legitimación en la causa por activa, y, por ello, hay lugar a acceder a lo pretendido.

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y

¹ Decreto 78 de 2016, artículo 3.2.6.6., numeral 13.

por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la controversia planteada, se advierte que no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos establecidos en primera instancia: que la agremiación ANTRAINDIGO se encuentra autorizada por el Ministerio de Salud y Protección Social para afiliar a sus de trabajadores independientes miembros al SGSS (págs.251 a 258, doc.01, carp.01), y que los trabajadores relacionados en el gráfico núm. 1 son afiliados a la agremiación demandante (págs.155 a 186, doc.01, carp.01).

Adicionalmente, no se discute que COOMEVA EPS S.A. expidió a los afiliados de la agremiación ANTRAINDIGO sendas incapacidades por los periodos relacionados en el gráfico núm. 1 (págs.13 a 56, doc.01, carp.01).

Siendo ello así, memora la Sala que la promotora de la Litis ubica como punto nodal del disenso la presunta mora injustificada por parte de la demandada AFP COLFONDOS S.A. en la gestión y ulterior trámite de la devolución de saldos, así como en el trámite de emisión y pago del bono pensional del que es titular.

2.3.1. La Legitimación en la Causa por Activa: Presupuesto Material de la Sentencia Estimatoria

La legitimación en la causa por activa² es uno de los pilares sobre los cuales descansa la titularidad del derecho cuyo reconocimiento se reclama ante la jurisdicción, por tanto, las deficiencias en su demostración traen como consecuencia inexcusable la imposibilidad que el juzgador atienda de manera favorable los intereses del pretensor.

Para la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, esta figura “**..corresponde a “la identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acción (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva)” (...), aclarando que “el acceso a la administración de justicia como garantía de orden superior (artículo 229 de la Constitución Política), para su plena realización, requiere que quien reclama la protección de un derecho sea su titular, ya sea que se pida a título personal o por sus**

² Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC, 19 ago., 1954, G.J. LXXVIII, n. 2145 *la legitimatio ad causam es cosa bien distinta de la legitimatio ad procesum: aquella es un elemento estructural de la acción ejercitada en cada caso, mientras que la última es un presupuesto procesal que consiste en la capacidad para estar en ejercicio por sí mismo o por medio de otros; la primera es requisito necesario para obtener sentencia favorable, mientras que la última es condición previa indispensable para que el juez pueda fallar en el fondo el negocio, en sentido favorable o desfavorable. La legitimatio ad causam es cuestión de fondo (merita causae), mientras que la legitimatio ad procesum es cuestión de rito”.*

representantes, pues, no se trata de una facultad ilimitada. Ese condicionamiento, precisamente, es el que legitima para accionar y, de faltar, el resultado solo puede ser adverso, sin siquiera analizar a profundidad los puntos en discusión³, para posteriormente concluir en renglón seguido que “**...es carga de la parte demandante acreditar plenamente la titularidad del derecho que invoca como requisito primigenio para el éxito de su pretensión.** Su falta de demostración conduce, inexorablemente, a la desestimación de las pretensiones elevadas por quien no probó en las oportunidades procesales correspondientes, la titularidad del derecho sustancial cuyo reconocimiento o protección se persigue⁴”. -Negritas y subrayado intencional de la Sala-

2.3.2. La Afiliación Colectiva de los Trabajadores Independientes al SGSSS: Obligaciones y Deberes de las Agremiaciones y Asociaciones de Trabajadores.

Lo primero que ha de resaltar la Sala para resolver el escollo que plantea el asunto litigioso es que el artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad social, al que le otorga una doble naturaleza, por un lado, de derecho fundamental y, por el otro, de servicio público, aclarando que se prestará bajo la dirección, la coordinación y el control del Estado, de acuerdo con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, así como el desarrollo legislativo que sobre el particular se efectúe.

A su turno, el artículo 49 del mismo instrumento *supralegal* dispone que le corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes, así como el establecimiento de las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, ejerciendo su vigilancia y control; agregando que deberá “*...establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley*”; a la par que “*...los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad*”.

De otro lado, encontramos que el Estado tiene la obligación de organizar la prestación de los servicios en salud a los habitantes del territorio, el cual se concibe de forma descentralizada, delegando entonces en instituciones públicas o privadas la atención a los ciudadanos de acuerdo con las reglas establecidas en la ley, conservando, eso sí, el control y vigilancia de aquellas en aras de garantizar la prestación de estos servicios bajo estándares mínimos de calidad, oportunidad, idoneidad y suficiencia.

³ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencias SC14658, 23 oct. 2015, Rad. 2010-00490-01; SC, 1º jul. 2008, Rad. 2001-06291-01, SC16279 de 2016, y SC592 de 2022.

⁴ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC592 de 2022.

En línea con lo anterior y como desarrollo de los mandatos constitucionales arriba anotados, se promulga la Ley 100 de 1993 a través de la cual se creó el Sistema General de Seguridad Social Integral, definido como el “...conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos y está conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos laborales y los servicios sociales complementarios⁵”, dentro cuyos objetivos se destacan “...garantizar las prestaciones económicas y de salud a quienes tienen una relación laboral o capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema⁶”, cubriendo paulatinamente también a “...sectores sin la capacidad económica suficiente como campesinos, indígenas y trabajadores independientes, artistas, deportistas, madres comunitarias⁷...”

Puntualmente a partir del artículo 152 *ejusdem* se estableció el Sistema General de Seguridad Social en Salud bajo la orientación y regulación del Presidente de la República y del Ministerio de Salud, cuyo objetivo es reglamentar este servicio público esencial y crear condiciones de acceso a toda la población y en todos los niveles de atención, en concordancia con los principios de calidad, eficiencia, sostenibilidad y transparencia. Así, fueron establecidos dos regímenes principales para su financiamiento y administración, el primero, denominado contributivo, que rige “...la vinculación de los individuos y las familias al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando tal vinculación se hace a través del pago de una cotización, individual y familiar, o un aporte económico previo financiado directamente por el afiliado o en concurrencia entre este y el empleador o la Nación, según el caso⁸”; y el segundo llamado subsidiado, en el que la afiliación de los individuos se asegura “...a través del pago de una cotización subsidiada, total o parcialmente, con recursos fiscales o de solidaridad⁹”.

En ilación con lo anterior, se tiene que el régimen contributivo es administrado por las entidades promotoras en salud, como “...responsables de la afiliación, el registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones, por delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía¹⁰”; consagrando los preceptos del SGSSS, como afiliados a obligatorios a este régimen “...las personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los **trabajadores independientes con capacidad de pago**¹¹”. -Negritas intencionales de la Sala-

⁵ Ley 100 de 1993, artículo 8.

⁶ Ley 100 de 1993, artículo 6, numeral 1.º

⁷ Ley 100 de 1993, artículo 6.

⁸ Ley 100 de 1993, artículo 202.

⁹ Ley 100 de 1993, artículo 211.

¹⁰ Ley 100 de 1993, artículo 177.

¹¹ Ley 100 de 1993, artículo 157, literal A, numeral 1.º

En tratándose de los trabajadores independientes¹², el párrafo 2.º del artículo 157 de la Ley 100 de 1993, autoriza la afiliación de aquellos al SGSSS de manera colectiva y voluntaria a través de agremiaciones o asociaciones; modalidad de vinculación al régimen contributivo en salud que actualmente se halla prevista y reglamentada de manera principal en el Decreto 780 de 2016, particularmente en sus artículos 2.1.4.6 y 3.2.6.1 a 3.2.6.14. En esta perspectiva y para los propósitos de esta decisión, los preceptos antes anotados definen como agremiación a toda “...[p]ersona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, que agrupa personas naturales con la misma profesión u oficio o que desarrollan una misma actividad económica, **siempre que estas tengan la calidad de trabajadores independientes...**”, entidad que debe obtener la autorización¹³ del Ministerio de Salud y Protección Social, previo cumplimiento de los requisitos¹⁴ establecidos en el prolijo compendio normativo para proceder a la afiliación de sus miembros.

Visto lo anterior, cabe precisar que una vez el trabajador independiente se vincula con una agremiación autorizada por la cartera ministerial competente, surgen para esta última precisos deberes¹⁵ frente a sus miembros, entre los que se destacan, **i.** Garantizar la libre elección de las entidades administradoras del SGSSS; **ii.** Reportar a la ARL dentro del término de dos (2) días hábiles siguientes a su ocurrencia o al diagnóstico según sea el caso, los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales de sus trabajadores independientes afiliados; **iii.** Pagar con recursos de la reserva especial de garantía mínima, las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral cuando el afiliado se encuentre en mora; **iv.** Informar a sus agremiados o asociados sobre los derechos y deberes que se adquieren al afiliarse de forma colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral; **v.** Adelantar los trámites administrativos de afiliación y reporte de novedades del trabajador independiente y sus beneficiarios; **vi.** Suscribir las certificaciones que requiera el trabajador independiente para afiliarse al Sistema de

¹² **Decreto 780 de 2016, artículo 3.2.6.2. Definiciones.** Para efecto de la afiliación colectiva de trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral de que trata el presente Título, se entiende por: (...) 3. *Trabajador independiente:* Persona natural que realiza una actividad económica o presta sus servicios de manera personal y por su cuenta y riesgo

¹³ **Decreto 780 de 2016, artículo 3.2.6.4. Autorización.** El Ministerio de Salud y Protección Social autorizará a las agremiaciones y asociaciones para afiliarse colectivamente a sus miembros al Sistema de Seguridad Social Integral, previa solicitud de su representante legal, la cual deberá cumplir con los requisitos señalados en el artículo siguiente. Una vez autorizada la agremiación o asociación, el Ministerio de Salud y Protección Social notificará directamente a las entidades administradoras del Sistema de Seguridad Social Integral sobre las entidades autorizadas para la afiliación colectiva de que trata el presente Título; de igual forma, las entidades administradoras deberán verificar mensualmente, la existencia y permanencia de las agremiaciones o asociaciones en el registro que deberá mantener actualizado el Ministerio de Salud y Protección Social.

¹⁴ **Decreto 780 de 2016, artículo 3.2.6.5. Requisitos para obtener la autorización.** Para obtener la autorización de que trata el artículo anterior, las agremiaciones y asociaciones deberán acreditar junto con la solicitud, el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Copia de la personería jurídica en la que conste que es una entidad de derecho privado sin ánimo de lucro, constituida legalmente como mínimo con un (1) año de antelación, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud de autorización prevista en el artículo anterior y que durante ese año ha desarrollado el mismo objeto social. 2. Acreditar un número mínimo de quinientos (500) afiliados. 3. Listado actualizado de afiliados activos que deberá contener: nombre completo, identificación, ciudad, dirección de residencia, número de teléfono, fecha de afiliación a la asociación o agremiación, ingreso base de cotización, monto de la cotización, nombre de las entidades administradoras del Sistema de Seguridad Social Integral a las que se encuentren afiliados o se vayan a afiliar, discriminando cada uno de los Sistemas de Seguridad Social Integral. 4. Copia de los estatutos de la entidad. 5. Copia del reglamento interno en el que se señalen los deberes y derechos de los agremiados o asociados. 6. Acreditar mediante certificación expedida por el revisor fiscal, contador o representante legal según corresponda, la constitución de la reserva especial de garantía mínima de que trata el artículo 3.2.6.7. del presente decreto. 7. Establecer dentro de sus Estatutos, el servicio de afiliación colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral. 8. Certificación expedida por la entidad financiera en la que conste la inversión de los recursos de la reserva especial de garantía mínima, la cual deberá contener además, el nombre y NIT de la agremiación o asociación, el número de la cuenta, el valor y la destinación de la misma; o póliza de garantía de cumplimiento del pago de aportes a la Seguridad Social, de que trata el numeral 2 del artículo 3.2.6.7. del presente decreto. 9. Presentar actualizados los estados financieros de la entidad, donde se refleje la reserva especial de garantía mínima como un rubro de destinación específica y exclusiva para el pago de las cotizaciones de sus trabajadores independientes afiliados, cuando esta se haya constituido a través de una entidad financiera conforme al artículo 3.2.6.7. del presente decreto. 10. Acreditar un patrimonio mínimo de 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin incluir la reserva especial de garantía mínima prevista en el artículo 3.2.6.7. del presente decreto. La solicitud de que trata el artículo anterior deberá precisar a qué Sistema de Seguridad Social se afiliarán de manera colectiva sus trabajadores independientes miembros.

¹⁵ **Decreto 780 de 2016, artículo 3.2.6.6.**

Seguridad Social Integral, y; **vii. Colaborar con el afiliado para obtener el pago de las prestaciones económicas respectivas a que tenga derecho.**

Aunado a lo anterior, de forma expresa¹⁶ se determinó que **a.** La vinculación del trabajador independiente a cualquiera de las agremiaciones o asociaciones no constituye relación o vínculo laboral, y; **b.** Los aspectos o situaciones no reguladas se sujetarán a las normas generales dispuesta para los trabajadores independientes en las normas que regulan el SGSS.

De lo hasta aquí discurrido, surge como corolario que la agremiación no representa de manera directa al trabajador independiente ante el SGSS, así tampoco se entiende titular del derecho a recibir o reclamar las prestaciones económicas que se causen a favor de éste, en la medida que, tal consecuencia no se encuentra inmersa dentro de las funciones y deberes que se consagraron para la agremiación, y por tanto, el reconocimiento de los auxilios económicos o subsidios de incapacidad continúan reglados por la normatividad ordinaria¹⁷.

2.3.3. Del Reembolso de las Incapacidades

La doctrina constitucional se ha mostrado consistente al reconocer que los auxilios económicos y subsidios de incapacidad cuentan con una estrecha relación en la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud y a la vida digna, afirmando que “...*en aras de garantizar que la persona afectada no interrumpa sus tratamientos médicos o que pueda percibir un sustento económico a título de incapacidad o de pensión de invalidez, cuando sea el caso. Tal hecho permite concluir que el Sistema de Seguridad Social está concebido como un engranaje en el cual se establece que ante una eventual contingencia exista una respuesta apropiada*”

En este sendero, en sentencia de revisión T-490 de 2015, la Corte Constitucional memoró que:

“i) el pago de las incapacidades sustituye el salario del trabajador, durante el tiempo que por razones médicas está impedido para desempeñar sus labores, cuando las incapacidades laborales son presumiblemente la única fuente de ingreso con que cuenta el trabajador para garantizarse su mínimo vital y el de su núcleo familiar;

ii) el pago de las incapacidades médicas constituye también una garantía del derecho a la salud del trabajador, pues coadyuva a que se recupere satisfactoriamente, sin tener que preocuparse por la reincorporación anticipada a sus actividades laborales, con el fin de obtener recursos para su sostenimiento y el de su familia; y

¹⁶ Decreto 780 de 2016, artículos 3.2.6.10 y 3.2.6.14.

¹⁷ Ley 100 de 1993, Decreto 019 de 2012 y Decreto 780 de 2016, entre otros.

iii) Además, los principios de dignidad humana e igualdad exigen que se brinde un tratamiento especial al trabajador, quien debido a su enfermedad se encuentra en estado de debilidad manifiesta.”

Concluyendo que “...durante los periodos en los cuales un trabajador no se encuentra en condiciones de salud adecuadas para realizar las labores que le permitan devengar el pago de su salario, el reconocimiento de incapacidades constituye como una garantía de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud y a la vida digna. De allí, que la Corte reconozca que sin dicha prestación, se presume la vulneración de los derechos en mención¹⁸”.

En orden a lo anterior, a voces del artículo 206 de la Ley 100 de 1993 se tiene que “...los afiliados de que trata el literal a) del artículo 157, el régimen contributivo reconocerá las incapacidades generadas en enfermedad general, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Para el cubrimiento de estos riesgos las Empresas Promotoras de Salud podrán subcontratar con compañías aseguradoras. Las incapacidades originadas en enfermedad profesional y accidente de trabajo serán reconocidas por las Entidades Promotoras de Salud y se financiarán con cargo a los recursos destinados para el pago de dichas contingencias en el respectivo régimen, de acuerdo con la reglamentación que se expida para el efecto”.

Adicional a lo anterior, no desconoce esta Sala que, con arreglo al artículo 8 de la Ley 828 de 2003, las entidades promotoras de salud como organismos del SGSS, están autorizadas para solicitar de los afiliados cotizantes, beneficiarios y empleadores, la información que “...que requieran para verificar la veracidad de sus aportes o la acreditación de la calidad de beneficiarios, sin perjuicio de la reserva que por ley tengan algunos documentos”; previendo que, en caso de que no acate el requerimiento dentro de los 30 días siguientes a su notificación, “...se procederá a suspender temporalmente el sistema de acreditación de derechos para el acceso de los servicios de salud frente al usuario respecto del cual no se entregue la documentación...”, lapso en que el empleador deberá sufragar directamente la atención en salud del afiliado cotizante, si la causa de la suspensión es imputable a aquel.

En línea con lo anterior y para el caso del reconocimiento de esta prestación económica en favor de los trabajadores independientes, afiliados o no de manera colectiva, la sentencia T-025 de 2017 dictada por la Corte Constitucional, apuntaló:

¹⁸ Corte Constitucional, Sentencia T-161 de 2019.

En lo atinente a los requisitos que se exigen para ser beneficiario de esta prestación, la Ley 100 de 1993,¹⁹ establece una normativa general. El desarrollo y contenido se ha llevado a cabo a través de decretos reglamentarios, como el Decreto 1804 de 1999, "Por el cual se expiden normas sobre el régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones". El artículo 21 de esta normativa, establece el derecho de los trabajadores independientes a solicitar el reembolso o pago de incapacidades por enfermedad general. **Así, los criterios para que la E.P.S. a la que se encuentre afiliado un trabajador independiente esté obligada a pagarle las incapacidades laborales por razón de enfermedad general, son los cinco siguientes: (i) haber cotizado al sistema, de forma ininterrumpida y completa, por un periodo mínimo de cuatro (4) semanas anteriores a la fecha de la solicitud de la prestación. (ii) Haber cancelado oportunamente por lo menos cuatro (4) de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de causación del derecho y no incurrir en mora en el pago de aportes durante el tiempo que esté disfrutando de la licencia. (iii) No tener deudas pendientes con Entidades Promotoras de Salud o Instituciones Prestadores de Servicios de Salud "por concepto de reembolsos que deba efectuar a dichas entidades".²⁰ (iv) Haber depositado información veraz al momento de su afiliación y de autoliquidar sus aportes, y (v) cumplir con los requisitos mínimos de movilidad en cuanto a la cotización a la seguridad social.**²¹ -Negritas y subrayado intencional de la Sala-

2.4 Caso Concreto

Revisados entonces los medios de convicción que fueran arrimados al plenario, encuentra esta Sala de Decisión, que la decisión adoptada en primera instancia se estima desacertada, toda vez que, de acuerdo con las elocuentes voces del artículo 206²² de la Ley 100 de 1993, los auxilios por incapacidad temporal generada por enfermedad o accidente de origen común se encuentran a cargo de la administradora del régimen contributivo en salud a la que se encuentre afiliado el beneficiario, pudiendo el trabajador independiente de manera directa, solicitar su reembolso o pago con arreglo a las reglas previstas en el artículo 2.1.13.4.²³ del Decreto 780 de 2016.

¹⁹ Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones". Concretamente puede aludirse al artículo 206. Incapacidades. "Para los afiliados de que trata el literal a) del artículo 157 el régimen contributivo reconocerá las incapacidades generadas en enfermedad general, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Para el cubrimiento de estos riesgos las Empresas Promotoras de Salud podrán subcontratar con compañías aseguradoras. Las incapacidades originadas en enfermedad profesional y accidente de trabajo serán reconocidas por las Entidades Promotoras de Salud y se financiarán con cargo a los recursos destinados para el pago de dichas contingencias en el respectivo régimen, de acuerdo con la reglamentación que se expida para el efecto". Y el artículo 172. "Funciones del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. 8. Definir el régimen que deberán aplicar las Entidades Promotoras de Salud para el reconocimiento y pago de las incapacidades originadas en enfermedad general y de las licencias de maternidad a los afiliados según las normas del régimen contributivo". Dice el literal a) del artículo 157 de la Ley 100 de 1993: "Artículo 157. A partir de la sanción de la presente Ley, todo colombiano participará en el servicio esencial de salud que permite el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados al régimen contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como participantes vinculados. || A. Afiliados al Sistema de Seguridad Social. || Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud: || 1. Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago. Estas personas deberán afiliarse al Sistema mediante las normas del régimen contributivo de que trata el capítulo I del título III de la presente Ley. || 2. Los afiliados al Sistema mediante el régimen subsidiado de que trata el Artículo 211 de la presente Ley son las personas sin capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización. Serán subsidiadas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud la población más pobre y vulnerable del país en las áreas rural y urbana. Tendrán particular importancia, dentro de este grupo, personas tales como las madres durante el embarazo, parto y postparto y período de lactancia, las madres comunitarias, las mujeres cabeza de familia, los niños menores de un año, los menores en situación irregular, los enfermos de Hansen, las personas mayores de 65 años, los discapacitados, los campesinos, las comunidades indígenas, los trabajadores y profesionales independientes, artistas y deportistas, toreros y sus subalternos, periodistas independientes, maestros de obra de construcción, albañiles, taxistas, electricistas, desempleados y demás personas sin capacidad de pago".

²⁰ Decreto 1804 de 1999, "Por el cual se expiden normas sobre el régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones", artículo 21.

²¹ Decreto 1804 de 1999, "Por el cual se expiden normas sobre el régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones", artículo 21.

²² Ley 100 de 1993, artículo 206. Incapacidades. Para los afiliados de que trata el literal a) del artículo 157, el régimen contributivo reconocerá las incapacidades generadas en enfermedad general, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Para el cubrimiento de estos riesgos las Empresas Promotoras de Salud podrán subcontratar con compañías aseguradoras. Las incapacidades originadas en enfermedad profesional<6> y accidente de trabajo serán reconocidas por las Entidades Promotoras de Salud y se financiarán con cargo a los recursos destinados para el pago de dichas contingencias en el respectivo régimen, de acuerdo con la reglamentación que se expida para el efecto.

²³ Decreto 1804 de 1999, artículo 21.

En razón a lo anterior, la accionante ANTRAINDIGO demostró en el presente trámite que detentaba la titularidad del derecho al desembolso de los auxilios económicos por motivo de las incapacidades de origen común extendida por COOMEVA EPS S.A. a sus trabajadores independientes miembros, (págs. doc.01 y 02, carp.01,), pues además de invocar la calidad de representante legal de la asociación gremial, también se presentó como apoderado especial²⁴ de todos y cada uno de los trabajadores relacionados en el gráfico 1 de la presente decisión, anexando el memorial poder que con el lleno de los requisitos legales le extendieron aquellos (págs.260 a 296, doc.01, carp.01), y siendo ello así, se satisface el presupuesto procesal de la legitimación en la causa por activa que no encontró probada la autoridad administrativa de primer grado.

Seguidamente y a pesar de encontrarse superados los requisitos sustanciales enunciados en esta actuación, ciertamente la parte actora se encontraba en la obligación de demostrar el cumplimiento de los requisitos que abren paso al reconocimiento del auxilio de incapacidad, los que recuerda la Sala corresponden a: ***(i) haber cotizado al sistema, de forma ininterrumpida y completa, por un periodo mínimo de cuatro (4) semanas anteriores a la fecha de la solicitud de la prestación. (ii) Haber cancelado oportunamente por lo menos cuatro (4) de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de causación del derecho y no incurrir en mora en el pago de aportes durante el tiempo que esté disfrutando de la licencia. (iii) No tener deudas pendientes con Entidades Promotoras de Salud o Instituciones Prestadores de Servicios de Salud “por concepto de reembolsos que deba efectuar a dichas entidades”.²⁵ (iv) Haber depositado información veraz al momento de su afiliación y de autoliquidar sus aportes, y (v) cumplir con los requisitos mínimos de movilidad en cuanto a la cotización a la seguridad social²⁶***; requisitos que no se acreditaron suficientemente en la foliatura, especialmente en lo que atañe a las planillas de pago de aportes durante cuatro (4) de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de causación del derecho de los trabajadores que se muestran en la siguiente gráfica:

²⁴ ANTONIO JOSE GARCIA BETANCUR, Mayor(sic) de edad y vecino de la ciudad de Medellín, actuando en calidad representante legal de la AGREMIACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES CON DIFERENTES PROFESIONES ARTES Y OFICIOS DIGORE, ANTRAINDIGO, identificada con el NIT:900.057.999-2, y como apoderado de los Trabajadores Independientes Agremiados, por medio del presente escrito presento ante ustedes SOLICITUD conforme a lo dispuesto en el Artículo(sic) 41 de la ley 1122 de 2007, modificado y adicionado por el artículo 126 de la ley 1438 de 2011, literal g) " conocer y decidir sobre el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas por parte de la EPS o del empleador", para el reconocimiento y PAGO EFECTIVO de LAS INCAPACIDADES, transcritas y liquidadas, pero adeudadas por la EPS COOMEVA, desde el año 2015 hasta el año 2017, de varios de nuestros Independientes agremiados, los cuales más adelante relacionaré, mismas que fueron debidamente expedidas y radicadas, según las políticas para el reconocimiento y pago de la misma EPS COOMEVA; además de diversos derechos de petición que se radicaron también para el reconocimiento y pago de las incapacidades en las instalaciones de la EPS COOMEVA, en los años 2016 y 2017, y han sido negadas en su pago injustamente y de manera ilegal, invocando la causal a la fecha de ocurrencia del evento existen periodos sin pago por el aportante, decreto 1804/1999 artículo 21-Decreto 806/1998", lo cual NO ES CIERTO y justificaré con base en los siguientes: (...)

²⁵Decreto 1804 de 1999, "Por el cual se expiden normas sobre el régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones", artículo 21.

²⁶ Corte Constitucional, sentencia T-025 de 2017-

No.	NOMBRE DEL AGREMIADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DÍAS DE INCAPACIDAD	COMPROBANTE INCAPACIDAD S/N	PÁG DEL DOC.01	PLANILLAS Y PERIODOS DE PAGO	PÁG DEL DOC.01, CARP.01	ÚLTIMOS 4 PERIODOS DE PAGO S/N	PROCEDE S/N
1	ÁLVARO ZAPATA ZAPATA	20/07/2015	5/08/2015	17	S	13	MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015	57-60	N	N
2	ÁLVARO ZAPATA ZAPATA	6/08/2015	23/08/2015	18	S	14	MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015	57-60	N	N
3	ÁLVARO ZAPATA ZAPATA	24/08/2015	22/09/2015	30	S	15	MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015	57-60	N	N
5	MARÍA CARMENZA CASTAÑEDA VERGARA	18/03/2016	19/03/2016	2	S	18	ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015; MARZO, ABRIL, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016; ENERO, JULIO, AGOSTO, DE 2017	61-74	N	N
6	MARÍA CARMENZA CASTAÑEDA VERGARA	21/03/2015	23/03/2015	3	S	17	ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015; MARZO, ABRIL, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016; ENERO, JULIO, AGOSTO, DE 2017	61-74	N	N
7	MARÍA CARMENZA CASTAÑEDA VERGARA	6/04/2016	8/04/2016	3	S	19	ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015; MARZO, ABRIL, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016; ENERO, JULIO, AGOSTO, DE 2017	61-74	N	N
17	MARÍA CARMENZA CASTAÑEDA VERGARA	14/09/2017	18/09/2017	3	S	29	ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015; MARZO, ABRIL, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016; ENERO, JULIO, AGOSTO, DE 2017	61-74	N	N
18	MARÍA CARMENZA CASTAÑEDA VERGARA	4/10/2017	4/10/2017	1	S	30	ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015; MARZO, ABRIL, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016; ENERO, JULIO, AGOSTO, DE 2017	61-74	N	N
19	MARÍA LUZ MILA DÍAZ MOSQUERA	13/11/2015	27/11/2015	15	S	31	SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015	75-77	N	N
20	RAMÓN EUCARIS PORRAS	27/02/2015	28/03/2015	30	S	32	ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015	78-80	N	N
21	JOHN FREDY MEDINA MESA	3/11/2015	22/11/2015	20	S	33	SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015	81-83	N	N
22	HÉCTOR HERNAN CARDONA ARTEAGA	11/07/2015	25/07/2015	15	S	34	MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015	84-86	N	N
23	ADALBERTO MERCADO	10/08/2015	24/08/2015	15	S	35	AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2015	87-89	N	N
24	ADALBERTO MERCADO	25/08/2015	3/09/2015	10	S	36	AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2015	87-89	N	N
25	ADALBERTO MERCADO	5/09/2015	14/09/2015	10	S	37	AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2015	87-89	N	N
26	ADALBERTO MERCADO	15/09/2015	23/09/2015	9	S	38	AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2015	87-89	N	N
27	SAUL ALBERO MONTOYA MONSALVE	28/07/2015	26/08/2015	30	S	39	ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015	90-94	N	N
29	VÍCTOR JULIO MOLINA PATIÑO	1/12/2016	30/12/2016	30	S	41	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016; FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017	95-100	N	N
30	VÍCTOR JULIO MOLINA PATIÑO	2/01/2017	31/01/2017	30	S	42	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016; FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017	95-100	N	N
31	VÍCTOR JULIO MOLINA PATIÑO	4/04/2017	6/04/2017	3	S	43	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016; FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017	95-100	N	N
34	LUZ DARY CARDONA GARCÍA	25/10/2016	23/11/2016	30	S	46	SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2016	107-109	N	N
37	BERTHA OLIVA OSPINA	14/06/2017	16/06/2016	3	S	49	ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017	113-118	N	N
42	CAMILO ALIRIO RIVERA	5/12/2016	10/12/2016	6	S	53	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016	128-130	N	N
43	GLORIA CECILIA PIZA CARDONA	20/11/017	19/12/2017	30	S	54	SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017	122-127	N	N
44	JOSÉ HERMIDES OCHOA MORENO	24/10/2017	12/11/2017	18	S	55	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017	131-132	N	N
45	OSCAR NORBEY PATIÑO RESTREPO	14/11/2017	18/11/2017	3	S	56	SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017	133-135	N	N

Situación distinta ocurre para el caso de los afiliados María Carmenza Castañeda Vergara y Saúl Alberto Montoya Monsalve, en la medida en que, los documentos aportados dan cuenta que para los periodos de incapacidad que se detallan se cumplieron las disposiciones legales, así:

No.	NOMBRE DEL AGREMIADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DÍAS DE INCAPACIDAD	COMPROBANTE INCAPACIDAD S/N	PÁG DEL DOC.01	PLANILLAS Y PERIODOS DE PAGO	PÁG DEL DOC.01, CARP.01	ÚLTIMOS 4 PERIODOS DE PAGO S/N	PROCEDE S/N
12	MARÍA CARMENZA CASTAÑEDA VERGARA	20/12/2016	21/12/2016	2	S	24	ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015; MARZO, ABRIL, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016; ENERO, JULIO, AGOSTO, DE 2017	61-74	S	S
13	MARÍA CARMENZA CASTAÑEDA VERGARA	23/12/2016	24/12/2016	2	S	25	ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015; MARZO, ABRIL, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016; ENERO, JULIO, AGOSTO, DE 2017	61-74	S	S
14	MARÍA CARMENZA CASTAÑEDA VERGARA	17/01/2017	18/01/2017	2	S	26	ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015; MARZO, ABRIL, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016; ENERO, JULIO, AGOSTO, DE 2017	61-74	S	S
15	MARÍA CARMENZA CASTAÑEDA VERGARA	20/01/2017	21/01/2017	2	S	27	ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015; MARZO, ABRIL, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016; ENERO, JULIO, AGOSTO, DE 2017	61-74	S	S
28	SAUL ALBEIRO MONTOYA MONSALVE	27/08/2015	24/09/2015	29	S	40	ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015	90-94	S	S

De acuerdo entonces con lo anterior, es procedente el reconocimiento de los auxilios de incapacidad en favor de los trabajadores susodichos y por los periodos que allí se indican; advirtiéndose que los mismos se calcularán con base en el salario mínimo legal mensual vigente, al ser este el IBC reportado en cada una de las planillas allegadas y por tanto no podrá ser inferior a dicha suma de manera proporcional a los días de incapacidad otorgados²⁷.

Efectuadas las operaciones aritméticas, teniendo en cuenta el IBC reportado en las planillas de autoliquidación de aportes, así como los días de incapacidad de cada trabajador y, que el auxilio por enfermedad no puede ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente para los años 2015 a 2017, según corresponda, arrojando como resultado de \$813.161 (ver cuadro anexo).

Sentado lo anterior, la Sala pasa a verificar la procedencia del reconocimiento de los intereses moratorios que reclama la parte actora. Sea lo primer advertir que con arreglo lo dispone el artículo 24 del Decreto 4023 de 2011, compilado en el artículo 2.2.3.2 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, a falta de pago de las prestaciones económicas se reconocerán intereses moratorios en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 24. PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS. A partir de la fecha de entrada en vigencia de las cuentas maestras de recaudo, los aportantes y trabajadores independientes, no podrán deducir de las cotizaciones en salud, los valores correspondientes a incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad y/o paternidad.

El pago de estas prestaciones económicas al aportante, será realizado directamente por la EPS y EOC, a través de reconocimiento directo o transferencia electrónica en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la autorización de la prestación económica por parte de la EPS o EOC. La revisión y liquidación de las solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas se efectuará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la solicitud del aportante.

²⁷ Corte Constitucional, sentencia C – 543 de 2007.

*En todo caso, para la autorización y pago de las prestaciones económicas, las EPS y las EOC deberán verificar la cotización al Régimen Contributivo del SGSSS, efectuada por el aportante beneficiario de las mismas. **PARÁGRAFO 1o.** La EPS o la EOC que no cumpla con el plazo definido para el trámite y pago de las prestaciones económicas, deberá realizar el reconocimiento y pago de intereses moratorios al aportante, de acuerdo con lo definido en el artículo 4o del Decreto 1281 de 2002.”*

Por su parte, el artículo 4 del Decreto 1281 de 2002 dispone:

***“Artículo 4º.** Intereses moratorios. El incumplimiento de los plazos previstos para el pago o giro de los recursos de que trata este decreto, causará intereses moratorios a favor de quien debió recibirlos, liquidados a la tasa de interés moratorio establecida para los tributos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales*

En síntesis, en caso de mora en el pago de incapacidades es procedente el pago de intereses moratorios, puesto que, ante el incumplimiento de una obligación por razones naturales y obvias, la parte deudora que no cumplió la obligación o que la cumplió tardíamente debe reconocer y pagar los intereses de mora, a título de indemnización de perjuicios, conforme lo disponen los artículos 1613 y 1614 del CC.

En el mismo sendero y en este punto de la controversia, la Sala no pierde de vista que en aras de que surja el derecho al reconocimiento de los referidos intereses, el aportante debe demostrar que efectuó la respectiva solicitud y que la misma no fue resuelta dentro del término legal con que contaba la entidad de seguridad social encargada del pago respectivo, además de que es menester probar las fechas en que se efectuó la revisión y liquidación de las prestaciones para así poder contabilizar el plazo para su pago, carga probatoria que se estima cumplida, al demostrarse que la accionante solicitó el pago de las incapacidades referidas el 20 de mayo de 2016 respecto del señor SAUL ALBEIRO CASTAÑEDA MONSALVE (págs.196 a 197, doc.01, carp.01) y el 10 de octubre de 2017 respecto de la señora MARÍA CARMENZA CASTAÑEDA VERGARA (págs.213 a 222, doc.01, carp.01).

Siendo ello así, la enjuiciada tenía que reconocer o autorizar la prestación económica dentro de los 15 días hábiles contados desde la radicación de la solicitud y, su pago, se debía efectuar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la autorización, encontrándose en mora desde el día 6º; por ello, atendiendo la falta de pago de las incapacidades en favor de los señores SAUL ALBEIRO CASTAÑEDA MONSALVE y MARÍA CARMENZA CASTAÑEDA VERGARA, proceden los intereses moratorios causados respecto de las incapacidades adeudadas a aquellos desde el 22 de junio de 2016 y 21 de noviembre de 2017, respectivamente, resarcimiento que deberá ser sufragado hasta la fecha de pago, liquidados conforme al artículo 4 del Decreto 1281 de 2002. En este sentido, se impondrá condena a la EPS enjuiciada.

Como colofón de lo expuesto, y atendiendo a las consideraciones fácticas y jurídicas antes expuestas, hay lugar a revocar la sentencia de primer grado, en cuanto absolvió a la demandada COOMEVA EPS S.A, de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por parte de la agremiación ANTRAINDIGO.

3. COSTAS

No hay lugar a costas por tratarse de un proceso especial, en el que tampoco se causaron ni impusieron en la decisión de primer grado.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

4. RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 23 de octubre de 2020 por la SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, dentro de la acción especial jurisdiccional promovida por la AGREMIACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES CON DIFERENTES PROFESIONES, ARTES Y OFICIOS DIGORE - ANTRAINDIGO, en contra de COOMEVA EPS S.A. En su lugar, ORDENAR a COOMEVA EPS S.A., a reconocer y pagar la suma de \$813.161 por concepto del auxilio de incapacidad a favor de los señores SAUL ALBEIRO CASTAÑEDA MONSALVE y MARÍA CARMENZA CASTAÑEDA VERGARA, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.


SEGUNDO: CONDENAR a COOMEVA EPS S.A. a reconocer y pagar a favor de los señores SAUL ALBEIRO CASTAÑEDA MONSALVE y MARÍA CARMENZA CASTAÑEDA VERGARA los intereses moratorios causados desde el 22 de junio de 2016 y 21 de noviembre de 2017 respectivamente, y hasta la calenda de pago efectivo de las sumas adeudadas, resarcimiento que deberá ser sufragado hasta la fecha de pago, liquidados conforme al artículo 4 del Decreto 1281 de 2002.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

Lo resuelto se notifica mediante EDICTO, acogiendo el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, DEVUÉLVASE el expediente a la dependencia de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



CARLOS ALBERTO LEBRÓN MORALES
Magistrado



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario



ANEXO - LIQUIDACIÓN

No.	NOMBRE DEL AGREMIADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DÍAS DE INCAPACIDAD	COMPROBANTE INCAPACIDAD S/N	PÁG DEL DOC.01	PLANILLAS Y PERIODOS DE PAGO	PÁG DEL DOC.01, CARP.01	ÚLTIMOS 4 PERIODOS DE PAGO S/N	PROCEDE S/N	SALARIO MÍNIMO	VALOR DÍA INCAPACIDAD	VALOR TOTAL INCAPACIDAD
12	MARÍA CARMENZA CASTAÑEDA VERGARA	20/12/2016	21/12/2016	2	S	24	ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015; MARZO, ABRIL, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016; ENERO, JULIO, AGOSTO, DE 2017	61-74	S	S	\$ 689.455	\$ 22.982	\$ 45.964
13	MARÍA CARMENZA CASTAÑEDA VERGARA	23/12/2016	24/12/2016	2	S	25	ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015; MARZO, ABRIL, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016; ENERO, JULIO, AGOSTO, DE 2017	61-74	S	S	\$ 689.455	\$ 22.982	\$ 45.964
14	MARÍA CARMENZA CASTAÑEDA VERGARA	17/01/2017	18/01/2017	2	S	26	ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015; MARZO, ABRIL, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016; ENERO, JULIO, AGOSTO, DE 2017	61-74	S	S	\$ 737.717	\$ 24.591	\$ 49.181
15	MARÍA CARMENZA CASTAÑEDA VERGARA	20/01/2017	21/01/2017	2	S	27	ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015; MARZO, ABRIL, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016; ENERO, JULIO, AGOSTO, DE 2017	61-74	S	S	\$ 737.717	\$ 24.591	\$ 49.181
28	SAUL ALBERO MONTOYA MONSALVE	27/08/2015	24/09/2015	29	S	40	ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015	90-94	S	S	\$ 644.350	\$ 21.478	\$ 622.872
GRAN TOTAL												\$ 813.161	